

**6478** *RESOLUCION de 19 de febrero de 1981, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación de una radiobaliza para la localización de siniestros para buques y embarcaciones nacionales.*

Como consecuencia del expediente incoado a instancia de la Empresa «Tecnología Electrónica, S. A.», con domicilio social en Madrid, calle Sebastián Gómez, número 5, solicitando la homologación de una radiobaliza para la localización de siniestros para su empleo en buques y embarcaciones nacionales, visto el resultado satisfactorio de las pruebas a que ha sido sometida ante la Comisión Técnica de la Dirección General de la Marina Mercante y comprobado que la misma cumple las exigencias establecidas en la especificación C-004 de la Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante de 26 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 165).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologada la siguiente:

Elemento: Radiobaliza para la localización de siniestros. Número de homologación: 1.313. Institución con la que ha de figurar en el mercado: SALVAIR T-271.

Madrid, 19 de febrero de 1981.—El Director general, Vicente Rodríguez-Guerra.

## MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

**6479** *ORDEN de 28 de enero de 1981 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por María del Carmen Díez del Corral Sánchez y Elisa Carracedo Ferrero.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído sentencia firme de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 16 de octubre de 1980, en el recurso contencioso-administrativo, número 518/1978, interpuesto por María del Carmen Díez del Corral Sánchez y Elisa Carracedo Ferrero contra este Departamento, sobre solicitud de declaración de que las concurrentes pueden concurrir a concurso oposición,

Este Ministerio ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente dice:

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por la representación procesal de doña María del Carmen Díez del Corral Sánchez y doña Elisa Carracedo Ferrero contra la resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional de veintinueve de junio de mil novecientos setenta y siete que convocó pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa y contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la anterior, debemos anular dicho acto en cuanto no establece un turno restringido entre Auxiliares Administrativos en las condiciones que señala el artículo octavo del Decreto de veintitrés de julio de mil novecientos setenta y uno, por no ser conforme al Ordenamiento Jurídico, declarando el derecho de las recurrentes a concurrir al concurso-oposición convocado por el referido turno debiendo la Administración demandada modificar en tal sentido la convocatoria impugnada; sin hacer especial declaración sobre las costas causadas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 26 de enero de 1981.—P. D., el Secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea Tejeiro.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado para la Sanidad.

**6480** *ORDEN de 6 de febrero de 1981 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por Angel Crespo Santillana.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído sentencia firme de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con fecha 22 de mayo de 1980, en el recurso contencioso-administrativo número 408.129, interpuesto por Angel Crespo Santillana contra este Departamento sobre provisión de vacantes del personal facultativo de la Seguridad Social,

Este Ministerio ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que con estimación de las alegaciones de inadmisibilidad opuestas por el representante de la Administración Pública y codemandado Instituto Nacional de Previsión debemos declarar y declaramos inadmisibles el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de don Angel Crespo Santillana contra Orden del Ministerio de Trabajo de veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis, por la que se desarrolla el procedimiento de provisión de vacantes del personal facultativo de la Seguridad Social, y contra la resolución del Subsecretario delegado de aquel Departamento ministerial de fecha cuatro de julio de mil novecientos setenta y siete, desestimatoria del recurso de reposición deducido por el accionante frente a aquella Orden ministerial; sin expresa imposición de las costas procesales.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 6 de febrero de 1981.—P. D., el Secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea Tejeiro

Ilmo. Sr. Director general de Planificación Sanitaria.

**6481** *ORDEN de 8 de febrero de 1981 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por Mariano Alonso Melendre.*

Ilmo. Sr.: Con fecha 20 de abril de 1975 la Audiencia Territorial de Valladolid dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 168/74, interpuesto por Mariano Alonso Melendre contra este Departamento, sobre acta de infracción número SP. 700/73, cuyo fallo era del siguiente tenor: «Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo número ciento sesenta y seis/mil novecientos setenta y cuatro, promovido por la representación procesal de don Mariano Alonso Melendre, contra la resolución de la Delegación Provincial de Trabajo de Palencia de nueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres, confirmatoria de la sanción propuesta en el acta de la Inspección Provincial SP. setecientos/mil novecientos setenta y tres y contra la de la Dirección General de Trabajo de veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y cuatro, desestimatoria de la alzada interpuesta contra la anterior, y anulamos los actos impugnados por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, sin hacer expresa imposición de costas, y con devolución de las cantidades entregadas.»

Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la Abogacía del Estado, que ha sido resuelto por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por sentencia de 1 de marzo de 1980, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de esta jurisdicción de la Audiencia Territorial de Valladolid, el veintiséis de abril de mil novecientos setenta y cinco, sobre infracción de la normativa de la Seguridad Social, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia; sin imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia del Tribunal Supremo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 8 de febrero de 1981.—P. D., el Secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea Tejeiro.

Ilmo. Sr. Director general de Régimen Económico.

**6482** *ORDEN de 6 de febrero de 1981 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por Antonio Fernández García.*

Ilmo. Sr.: Con fecha 4 de febrero de 1975, la Audiencia Territorial de Valladolid dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 61/74, interpuesto por Antonio Fernández García contra este Departamento, sobre acta de liquidación número 231/71, cuyo fallo era del siguiente tenor: «Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Antonio Fernández

García contra las resoluciones de veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y uno y catorce de marzo de mil novecientos setenta y dos, la primera dictada por la Delegación Provincial de Trabajo de León y la segunda por la Dirección General de la Seguridad Social, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la anterior, debemos declarar y declaramos la nulidad de ambos actos administrativos y la del acta que confirman, única y exclusivamente en lo que se refiere a la base de cotización y cuota calculada por complemento de compensación, manteniéndose la conformidad con el ordenamiento jurídico de sus demás pronunciamientos y ordenando se practique respecto de tal extremo nueva liquidación con base en los criterios recogidos en el quinto, sexto y séptimo considerandos de esta resolución, todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguno de las partes.

Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la Abogacía del Estado, que ha sido resuelto por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por sentencia de 30 de enero de 1980, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, y con revocación parcial de la sentencia apelada, debemos declarar y declaramos que la Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de catorce de marzo de mil novecientos setenta y dos, desestimatoria del recurso de alzada promovido contra la resolución de la Delegación Provincial de Trabajo de León de veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y uno, que confirmó el acta de liquidación de cuotas a la Mutualidad Laboral del Carbón número doscientos treinta y uno de mil novecientos setenta y uno, levantada a la Empresa por la Inspección de Trabajo de diecisiete de abril de mil novecientos setenta y uno, son todas ellas, así como la referida acta, conformes a derecho, por lo que absolvemos a la Administración de las peticiones deducidas en la demanda; sin hacer imposición de las costas causadas en ambas instancias.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia del Tribunal Supremo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 6 de febrero de 1981.—P. D., el Secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea Tejero.

Ilmo. Sr. Director general de Régimen Económico.

## MINISTERIO DE CULTURA

**6483** ORDEN de 17 de febrero de 1981 por la que se convoca el Premio de Historia de España 1981.

Ilmos. Sres.: Por Orden ministerial de 15 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de septiembre de 1975), se creó el Premio de Historia de España para estimular la importante labor de estudio e investigación histórica que viene realizándose en nuestro país. La conveniencia de contribuir a la más amplia difusión y conocimiento de los resultados conseguidos aconsejan proceder nuevamente a la convocatoria del citado premio, como medio adecuado para estimular estos trabajos y resaltar el valor e importancia de los mismos.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se convoca el Premio Historia de España 1981.

Art. 2.º Al Premio de Historia de España 1981 podrán optar los libros publicados por autores españoles y editados en España, en su primera edición, entre el 15 de noviembre de 1980 y el 1 de noviembre de 1981, y que hayan cumplido los requisitos legales establecidos para su difusión.

La fecha de edición quedará determinada en el cumplimiento del trámite de depósito legal.

Art. 3.º Para aspirar al premio será preciso que el libro se presente por quintuplicado, acompañado de una instancia, en la que habrá de hacerse constar que ha sido publicado por primera vez entre el 15 de noviembre de 1980 y el 1 de noviembre de 1981, y que el autor no ha obtenido este premio con anterioridad. La instancia deberá ser dirigida al Director General de Promoción del Libro y de la Cinematografía, presentándose con los cinco ejemplares en el Registro General del Ministerio de Cultura, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 6.º de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La instancia podrá ser presentada por el autor o autores, por la Empresa editorial que haya publicado la obra, o por el Presidente, Director o Secretario de la Institución cultural que estime conveniente proponer la atribución del premio a una obra temáticamente vinculada a sus propias actividades sociales.

El plazo de presentación terminará el día 1 de noviembre de 1981. Se concede un plazo de quince días hábiles siguientes a la citada fecha para subsanar la eventual omisión de cualquier requisito de carácter formal.

Art. 4.º El Premio de Historia de España estará dotado con 1.500.000 pesetas, corriendo su importe y los gastos derivados del mismo a cargo del crédito presupuestario asignado a la Dirección General de Promoción del Libro y de la Cinematografía para Premios Nacionales, numeración económico-funcional 28.04/252/3.

Art. 5.º El Jurado estará presidido por el Director General de Promoción del Libro y de la Cinematografía, y actuará como Secretario, sin voto, el Secretario general del citado Centro directivo. El Presidente podrá delegar en un Subdirector general del Centro directivo.

Formarán parte del Jurado:

El Presidente de la Real Academia de la Historia.

El Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Un Catedrático de Universidad, de Historia, propuesto por la Junta Nacional de Universidades.

El autor galardonado con el Premio Nacional de Historia en la convocatoria anterior, y en su defecto, en la precedente.

Actuará como Asesor del Jurado el Subdirector general del Libro, con voz pero sin voto.

Art. 6.º Los miembros del Jurado no podrán delegar su representación, salvo lo previsto para el Presidente.

En las votaciones solamente se tendrán en cuenta los votos emitidos por los miembros del Jurado asistentes a la reunión del mismo.

Art. 7.º Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las dietas previstas al efecto por las disposiciones vigentes, así como al abono de los trabajos de estudio y selección y de las indemnizaciones que se les ocasionen por locomoción.

Art. 8.º El premio podrá declararse desierto si el Jurado considera que ninguna de las obras presentadas reúne los méritos suficientes para ser galardonada, pero no podrá ser dividido.

Art. 9.º La Dirección General de Promoción del Libro y de la Cinematografía con cargo a sus dotaciones presupuestarias, adquirirá un número de ejemplares del libro galardonado hasta un máximo de 200.000 pesetas, o 500 ejemplares del mismo.

Art. 10. La devolución de las obras no premiadas se efectuará a petición del autor o autores, de la Empresa editorial que hubiera publicado la obra, o por el Presidente, Director o Secretario de la Institución Cultural que hubiese presentado los libros. Dicha petición habrá de hacerse dentro de los noventa días naturales siguientes al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución por la que se otorgue el premio.

Art. 11. La presentación de obras para tomar parte en la convocatoria del premio supone la aceptación expresa y formal de estas bases y del fallo del Jurado, que será inapelable.

### DISPOSICION TRANSITORIA

Podrán concurrir a esta convocatoria los libros que, habiéndose presentado a la anterior, quedaron excluidos por razón de la acreditación de la fecha de edición, que en aquella convocatoria venía determinada por el cumplimiento del depósito administrativo, siempre que este trámite se haya cumplido con anterioridad al 1 de noviembre de 1981.

Asimismo a estos libros no les serán aplicables las modificaciones que en cuanto a autoría de los mismos se han introducido en el artículo 2.º de la presente convocatoria en relación con la anterior.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 17 de febrero de 1981.

CAVERO LATAILLADE

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de Promoción del Libro y de la Cinematografía.

**6484** ORDEN de 17 de febrero de 1981 por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura de «Novela y Narrativa», «Ensayo» y «Poesía en Lengua Castellana», 1981.

Ilmos. Sres.: Como contribución y estímulo a la creación literaria, se convocan los Premios Nacionales de Literatura, 1981.

Al igual que en convocatorias anteriores, se recogen también en la presente los propósitos de contribuir a la difusión de los libros premiados y de alentar la actividad editorial que determina su publicación, mediante el compromiso de adquirir cierto número de ejemplares de cada uno de los libros galardonados.

Por todo lo cual he tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se convocan los Premios Nacionales de Literatura de «Novela y Narrativa», «Ensayo» y «Poesía en lengua castellana», correspondientes al año 1981.